

MAYO 19 de 1920

7^a. REUNION — 2^a. SESION ORDINARIAPRESIDENCIA DE LOS SEÑORES DON ARTURO GOYENECHÉ
Y DON TEÓFILO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE

DIPUTADOS PRESENTES: Agesta Enrique, Agüero Vera J. Zacarías, Albarracín Francisco L., Aldao Ricardo, Alemán Eugenio, Anastasi Leonidas, Anello Arturo, Arana Eduardo, Arana Macedonio, Arámburu Juan B., Aráoz José Luis, Aráoz Miguel A., Arnedo Rodolfo, As-trada Manuel J., Avellaneda Marco A., Avellaneda Nicolás A., Bary Alberto de, Barrera Nicholas Antonio, Bas Arturo M., Beguiristain Manuel, Beiró Francisco, Bermúdez Manuel A., Bravo Mario, Bunge Augusto, Cabrera Enrique, Cafferata Juan F., Capurro Juan J., Carac-che Pedro, Cárcano Ramón J., Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Carosini Alberto H., Casás José O., Celesia Ernesto H., Costanti Gerardo, Corvalán Santiago E., Correa Francisco E., Costa Julio A., Davel Ricardo J., De Andreis Fernando, Díaz de Vivar Ramón, Dickmann Enrique, Dussaut Rubén, Echagüe Alfredo, Escobar Adrián C., Fernández Daniel, Fernández Jacinto, Ferrarotti Juan Luis, Ferreyra Andrés (hijo), Fox Pedro A., Francioni Isaac, Frugoni Juan José, Gallardo Manuel, Gallegos Moyano C., Garat Damián P., Gatica Teófilo I., Gibert Pedro F., Gil Matías, González Iramain Héctor, González José Antonio, González Zimmermann A., Goyeneche Arturo, Grau José M., Güerci Luis, Hernández Sabá Z., Isnardi Arturo, Justo Juan B., Lagos Joaquín, Landaburu Laureano, Lencinas Carlos W., López Héctor S., López Anaut Pedro, Maidana Julián, Martínez Benigno, Martínez Enrique, Martínez José H., Martínez José M., Massoni José S., Méndez Casariego Alberto, Miguez Edgardo J., Miñones Alejandro, Molina Víctor M., Molinas Luciano F., Mora y Araujo Manuel, Moral Ernesto M. del, Moreno Julio del C., Muzio Agustín S., Noriega José Victor, Nuñez Pedro R., O'Farrell Juan, Olmos José F., O'Reilly Guillermo R., Ortiz Roberto M., Otamendi José A., Oyhanarte Raúl, Padilla Eduardo, Padilla Ernesto, Parodi Silvio E., Parry Roberto, Paz Alberto J., Peña Manuel, Pe-reyra Rozas Ricardo, Pérez Virasoro Evaristo, Pinedo Federico (hijo), Pradère Carlos M., Quinteros Eduardo F., Quirós Herminio J., Raffo de la Reta Julio C., Repetto Nicolás, Riú Francisco A., Robín Castro Napoleón, Rodeyro José León, Rodríguez Calixto A., Rodríguez Jorge R., Rothe Guillermo, Sánchez de Bustamante T., Sánchez Sorondo M. G., Santa María Ar-turo, Santamarina Antonio, Solanet Pedro, Taboada Diógenes, Tamborini José P., Tomaso An-tonio de, Tomazewski Eduardo M., Vedia Mariano de, Vera Octaviano S., Vergara Valentín, Villafañe Benjamín, Yolde L.; DIPUTADOS AUSENTES: con licencia: Quillet Emilio; con aviso: Cristóbal Gumersindo, Valle Delfor del; sin aviso: Berrondo Valentín, Breard Eugenio E., Cabrera Anibal, Ceballos Mariano P., Cortínez Domingo, Daneri Luis M., Demaría Mariano (hijo), Guido Mario A., Laurencena Miguel M., Leguizamón Arturo, Lehmann G., Lozano An-tonio, Montes José A., Monesca Eduardo, Oliva Remonda Mingrand Federico, Rodríguez Carlos J., Rougés León, Rubilar Francisco, Tierney Juan P., Usandivaras Agustín.

SUMARIO

- 1—Apruébase el **acta** de la sesión anterior.
- 2—**Asuntos entrados.**
- 3—Proyecto de ley del señor diputado Mo-lina por el que se crea una comisión que se denominará **Instituto nacional de ca-sas para trabajadores.**
- 4—Proyecto de ley del mismo señor dipu-tado por el que se crea una comisión de **contralor del precio de los alquileres en la capital.**
- 5—Proyecto de ley de los señores diputados Ferrarotti y Fernández (J.) sobre nacio-nalización de los títulos de escribano.
- 6—Proyecto de ley del señor diputado Ver-gara por el que se prohíbe la **introduc-ción y fabricación de explosivos.**
- 7—**Licencia para faltar a sesiones acordada al señor diputado Quillet.**
- 8—Manifestación del señor diputado Cos-ta respecto a la **apertura del congreso.**
- 9—Moción aprobada del señor diputado Noriega para que se publique en el **Di-ario de Sesiones** dos notas del juez letra-do de la Pampa, doctor Rafael de Allende.
- 10—Consideración y aprobación del despacho de la comisión especial de reforma del reglamento con respecto a la **organiza-ción de las comisiones de la honorable cámara.**
- 11—Consideración y aprobación del dictamen de la comisión especial de poderes con referencia al **sorteo de bancas de los se-ñores diputados.** Practicase el sorteo mencionado.
- 12—La honorable cámara **resuelve no reunir-se hasta el martes 1.º de junio.**

13—Autorízase al señor presidente a distribuir los asuntos pendientes con arreglo a la nueva organización de las comisiones.

—En Buenos Aires, a 19 de mayo de 1920, a la hora 16 y 5, ocupan sus asientos en el recinto los señores diputados en quórum legal.

1

ACTA

Sr. Presidente (Goyeneche). — Queda abierta la sesión con asistencia de 95 señores diputados en el recinto y 118 en la casa.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. Pradére. — Hago indicación de que se suprima la lectura y se de el acta por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Haciendo asentimiento, queda aprobada.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Despacho de las comisiones

ESPECIAL REFORMADORA DEL REGLAMENTO

En los proyectos de ley presentados por varios señores diputados.

ESPECIAL DE PODERES

Sobre el procedimiento a seguirse en el sorteo de bancas.

—A la orden del día.

Comunicaciones oficiales

El honorable senado comunica haber sancionado definitivamente el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión poniendo en vigencia para el corriente mes las leyes impositivas y el presupuesto de gastos del año 1919.

—Al archivo.

Peticiones particulares

La Federación de empleados de asilos y hospitales nacionales solicita aumento de sueldos. (*A la comisión de presupuesto*).

—Obreros de la empresa Las Catalinas solicitan ser comprendidos en los beneficios de la ley de jubilaciones de ferroviarios. (*A la comisión de legislación*).

—Los concesionarios para la construcción del puerto de Posadas reiteran su solicitud anterior de concesión de un ferrocarril económico en el territorio de Misiones. (*A la comisión de obras públicas*).

SOLICITUDES DE PENSION

María Carmen Moyano de Salas, Ida Gagliardo de Díaz. (*A la comisión de pensiones*).

3

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º — Créase una corporación autónoma, con el nombre de "Instituto nacional de casas para trabajadores" que tendrá a su cargo el fomento y la construcción de casas higiénicas y baratas para los trabajadores.

Art. 2.º — El Instituto nacional de casas para trabajadores tiene personería jurídica.

Art. 3.º — La dirección del Instituto nacional está a cargo de un directorio compuesto de la siguiente manera: Un presidente, cuyo cargo será desempeñado por el del Banco hipotecario nacional, un vicepresidente designado por elección del directorio, doce vocales, tres de los cuales serán diputados elegidos nominalmente por la cámara y un senador designado en la misma forma por el senado. Duran dos años y pueden ser reelectos mientras dure su mandato. El director general de arquitectura de la nación. El presidente o vicepresidente del Banco de la nación. El presidente de la Caja de ahorro postal. El secretario de hacienda de la intendencia de la capital. El presidente del concejo deliberante de la capital. Un delegado de las sociedades cooperativas adheridas. Un delegado de las sociedades de socorros mutuos acogidas a esta ley. El presidente de la unión industrial argentina. Todos los cargos del directorio son gratuitos, con excepción del secretario que se designe, quien será rentado.

realizar beneficios de gestión más considerables, llevándolos a reserva. Y es prudente que constituyan reservas para responder a los *álceas* que presenta una gestión de intereses inmobiliarios. Estos beneficios son reales, aunque no aparentes, y provenientes sea de la amortización de las construcciones, sea sobre la plus-valía de sus terrenos. No conviene desnaturalizar el fin filantrópico de la sociedad, y por eso se establece que en caso de liquidación se devuelve a los accionistas su capital con más un 30 o/o de esas utilidades acumuladas en las reservas. La ley francesa de 26 de febrero autoriza hasta el 50 por ciento; la italiana del 23 de enero de 1902 autoriza hasta el 20 por ciento.

Otra de las disposiciones que ha de llamar la atención porque contraría cierta rutina criolla, es la preceptiva que han de formar parte del directorio algunos legisladores.

No faltará quien sostenga que ello es contrario a la división de poderes; pero no es así. La constitución autoriza a los legisladores para que acepten comisiones del poder ejecutivo, con permiso de la cámara respectiva. A mayor razón la ley puede autorizar, por altas conveniencias públicas, esta misión gratuita emanada de la representación nacional.

Habrán algunos espíritus estrechos que encontrarán injustificado este aporte de pesos 25.000.000 con que contribuirá el estado, si este proyecto llega a convertirse en ley, a la vivienda obrera.

Pero hay en ello un deber emergente del preámbulo de la constitución: asegurar "el bienestar general" y hay, al mismo tiempo, una conveniencia y un interés: "*la casa higiénica*" es la salud preservada, y, por consecuencia la disminución de las cargas de la hospitalización; "*la casa barata*" es salario economizado o ahorrado, y, por lo tanto, alivio para las instituciones de asistencia social o de beneficencia. Es, además, en las circunstancias presentes la solución de una crisis. Dividiendo la propiedad y haciéndola accesible al mayor número, se contribuye poderosamente al orden social y se modera el encarecimiento de la vida en uno de sus principales factores.

La cosa bien vale la pena de dedicarle desde ya los 40 millones que prevé mi proyecto. El aumento de la suma ya vendrá después por el general convencimiento de la eficacia de esta obra.

—Pasa el proyecto a la comisión de legislación.

4

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etcétera:

Artículo 1.º — Autorízase al intendente municipal de la capital de la república, para constituir comisiones arbitrales de alquileres que tendrán la facultad de resolver breve y sumariamente:

- a) Sobre los reclamos que interpusieran los inquilinos respecto de los aumentos de alquileres que les hubieran impuesto los propietarios desde el 1.º de enero de 1919, hasta la promulgación de esta ley.
- b) Sobre los aumentos que se impusieran en adelante.
- c) Sobre la fijación de los nuevos alquileres.

Las resoluciones de estas comisiones se dictarán "ex aequo et bono" y obligarán a los propietarios hasta el 31 de diciembre de 1922.

Art. 2.º — Estas comisiones se compondrán de un presidente designado por el intendente y cuatro vocales, dos de los cuales serán elegidos por los propietarios y dos por los inquilinos de acuerdo con la reglamentación que al efecto dictará el concejo deliberante. Cuatro suplentes serán elegidos en la misma forma.

Art. 3.º — Habrá una comisión por cada juzgado de paz y con el mismo radio que corresponde a éste.

Art. 4.º — El concejo deliberante determinará el personal rentado que auxiliará a dichas comisiones.

Art. 5.º — Para la fijación de los alquileres, las comisiones se ajustarán a las siguientes reglas:

- a) No fijarán alquiler inferior al ocho por ciento bruto de la tasación para el pago de la contribución territorial, ni aprobará aumentos que excedan del 25 por ciento de los alquileres vigentes hasta el 1.º de enero de 1919.
- b) Sólo atenderán los reclamos de los inquilinos que hubieren abonado el mes de alquiler anterior a aquel en que efectúe la reclamación.
- c) Pondrán en conocimiento de la intendencia cualquier transgresión de las ordenanzas municipales que observaren en las casas o habitaciones que visitasen con motivo de las reclamaciones, como igualmente las mejoras higiénicas que a su juicio deban practicar los

propietarios o inquilinos principales en su caso.

d) Si se tratase de sublocación, las comisiones no autorizarán diferencias mayores del 25 o/o entre el alquiler originario y el de la sublocación.

e) Las comisiones no intervendrán en los casos en que mediase contrato escrito.

Art. 6.º — En el caso en que la comisión arbitral no llegase a fijar el precio dentro de los veinte días de interpuesto el reclamo, el presidente lo deferirá de oficio al juez de paz, el cual lo resolverá definitivamente, oyendo a la comisión si lo juzga necesario.

Art. 7.º — Toda infracción a la presente ley se castigará con multas de 200 a 1000 pesos; en caso de reincidencia se aplicará, además, la pena de arresto de cinco a diez días. Es competente el juez de paz con apelación ante el juez correccional en turno.

Art. 8.º Los gastos que demande la ejecución de la presente ley, así como la construcción de galpones y depósitos que construirá la municipalidad para el asilo provisorio de las personas desalojadas y de sus muebles, se harán con los recursos que prevé el artículo siguiente.

Art. 9.º — Créase una sobretasa de la contribución territorial del 2 por mil anual de los terrenos baldíos que existieran dentro del perímetro formado por las calles Caseros, Jujuy, Pueyrredón y Callao y Entre Ríos, exclusive, y de 4 por mil para todos los terrenos baldíos y fincas de un solo piso que se hallen dentro de perímetro formado por las calles San Juan, Entre Ríos, Callao, paseos Leandro N. Alem y Colón. Este impuesto regirá durante los años 1920, 21 y 1922, y su monto se cartegará sin cargo alguno por la dirección de contribución territorial y patentes de la nación. Si hubiere sobrantes se destinarán a la mejora de los hospitales municipales. Toda finca que se mantenga por el propietario desocupada por más de 30 días, pagará una sobretasa del 1 o/o anual.

Art. 10.º — Hasta el 31 de diciembre de 1922 los términos actuales para el desalojo de fincas urbanas se duplicarán siempre que el locatario estuviera al día en sus alquileres.

Art. 11.º — Los jueces no admitirán demandas de desalojo de las casas, locales o habitaciones cuyos inquilinos hubieran reclamado ante la comisión hasta pasados seis meses de la resolución del reclamo, a menos que se tratase de inquilinos que adeudasen dos mensualidades. Toda nueva locación se entiende hecha por un año aun sin estipulación expresa, y durante ese tiempo no podrá alterarse el alquiler.

Art. 12.º — Toda sentencia de desalojo se hará saber a todos los habitantes de la casa por medio de una cédula que se pegará en las paredes interiores de la misma.

Art. 13.º — Es nula toda cláusula que estipule que los inquilinos no pueden habitar con hijos menores y el propietario que tal cláusula impusiere o pretendiese imponer, será castigado con una multa de 500 a 1000 pesos o diez a treinta días de arresto y con ambas penas en caso de reincidencia.

Art. 14.º — Esta ley durará en sus efectos hasta el 31 de diciembre de 1922.

Art. 15.º — Comuníquese al poder ejecutivo.

F. M. Molina.

Sr. Molina. — Señor presidente:

El proyecto que tengo la honra de presentar a vuestra consideración está informado por graves y urgentes exigencias del momento actual. Es, ante todo, un proyecto de ley de emergencia destinado a remediar la situación difícil de vida que pesa sobre las clases media y proletaria afligidas por el encarecimiento inaudito de la vivienda y de los artículos más indispensables para la subsistencia.

Tal extremo encarecimiento reconoce múltiples causas, algunas de las cuales son de carácter universal que no está en mis manos modificar y otras que, surgidas del abuso de los propietarios y comerciantes, pueden y deben repararse por una legislación firme y enérgica, si bien transitoria o limitada a un período de tiempo determinado.

La habitación, en algunas ciudades de la república y principalmente en la capital, ha llegado a un costo tal que puede decirse sin temor de equivocarse, que constituye un problema pavoroso de todos los hogares modestos: el empleado y el obrero insumen un tercio y a veces la mitad de sus entradas totales en el pago de alquileres de casas o habitaciones mediocres y hasta malsanas.

Contémplesse la situación del empleado que gana de 200 a 300 pesos y al que se le exige un alquiler de 150 a 180 pesos mensuales. ¿Es posible que con los cuatro o cinco pesos que le quedan subvenga a las necesidades propias y de su familia, cuando el pan, la carne, el vestido y el calzado han llegado a precios casi prohibitivos? Y qué decir, honorable cámara, del obrero que gana 4 o 6 pesos diarios, cuando trabaja, porque hay que descontarles las fiestas, a algunos los días de lluvia y a todos los feriados, de desocupación o enfermedad?

El aumento de los alquileres se hace sin tasa ni medida; no se trata ya de algo normal

y soportable; el abuso no tiene límites; son muchos los propietarios que sin escuchar otra voz que la de su codicia han sembrado la desesperación y la miseria entre la enorme masa de los que viven del trabajo diario.

La repercusión de estos escandalosos aumentos de alquiler es colosal: el empleado y el obrero, desesperanzados de la acción del parlamento y del gobierno, se refugian en un criterio unilateral; no viendo cómo obtener el abaratamiento de la vida, piden, reclaman, exigen imperiosamente el aumento de su sueldo o de su salario. Una vez que consigue el aumento se produce con sorpresa suya, un mayor encarecimiento de la vida y por consiguiente una mayor insuficiencia del sueldo y del salario; los presupuestos gubernativos crecen y juntamente con ellos se multiplican los impuestos; la edificación se encarece por el mayor costo de la mano de obra y de los materiales y el pan, y los productos agrícolas, todo lo que exige la aplicación del brazo, sin excluir los transportes, marcan nuevas líneas en la escala ascendente de los valores.

Hay que abandonar un remedio, que es sólo un paliativo momentáneo de la enfermedad y atacar a ésta en su raíz.

Hay muchos que buscan encontrar la causa del aumento de los alquileres en la ley de la oferta y la demanda y se cruzan de brazos una vez que han comprobado que el fenómeno se encuadra dentro de las leyes generales de la economía política.

Sin duda alguna, el hacinamiento de las masas humanas en las ciudades tiende a hacerse cada vez mayor, en virtud de la aglomeración que provoca la grande industria y las demás modalidades de la vida moderna, el hecho es universal, y, como la edificación no crece en razón directa del crecimiento de la población, se produce el desequilibrio. Hay más demanda y menor oferta, lo que se traduce en aumento del alquiler.

La acción que impone esta situación es, por consiguiente, doble: es menester provocar y favorecer la edificación, pero, entretanto, hay que adoptar medidas de emergencia que impidan la explotación y diré más: la estrangulación de las clases trabajadoras.

La primera es de carácter permanente y forma el objeto de otro proyecto que acabo de presentar; la segunda es transitoria; regirá el tiempo prudencial para que volvamos a la normalidad.

Ya, y con el fin de ir solucionando el problema de la edificación, presenté, hace tres años, un proyecto ordenando la edificación por la municipalidad de la ciudad de Buenos Ai-

res de las avenidas diagonales, a base del préstamo hipotecario. Si entonces se me hubiera escuchado, tendríamos hoy 10.000 habitaciones libradas al servicio público y no habríamos tenido que vender terrenos a un precio inferior al de la expropiación.

Ahora se me objetará que la limitación del monto de los alquileres que hoy propongo contradice la ley de la oferta y la demanda y ataca la libertad de contratar y, por otra parte, se dirá que dicha limitación es contraria al incremento de la edificación.

Debo dilucidar ambas objeciones, seguro de desautorizarlas por completo.

Estamos en presencia de lo anormal; desde la guerra hasta hoy la ley de la oferta y la demanda ha sido sustituida en el hecho por el sistema del acaparamiento que, en todos los países del mundo ha provocado una legislación represiva. Los alquileres no han escapado en Francia, en Inglaterra, en Italia, etc., a esa clase de leyes de emergencia. Así, en Inglaterra los alquileres pueden sólo ser aumentados en 10 o/o durante tres años. En Francia, además de numerosas leyes que sería prolijo enunciar, el ministro de gracia y justicia presentó este año al senado un proyecto, cuyos artículos 6, 7 y 8 conviene transcribir:

“Art. 6.º — Durante el período de aplicación de la presente ley (tres años) serán castigados con prisión de dos meses a dos años, y con multa de 500 a 30.000 francos todos los propietarios, administradores de inmuebles, gerentes de hoteles y pensiones de familia y toda persona que, con un fin de especulación ilícita, haya aumentado abusivamente el precio de los alquileres.

“Art. 7.º — Serán castigadas con la misma pena las personas aludidas en el artículo precedente que con un fin de especulación ilícita, hayan provocado o intentado provocar el alza de los precios de los alquileres por medios cualesquiera y, especialmente disimulando la vacancia de los locales existentes en sus inmuebles, hoteles y pensiones de familia.

“Art. 8.º — Todo acuerdo organizado entre las personas aludidas en el artículo 1.º, tendiente a provocar con un fin de especulación ilícita, el alza de los precios de los alquileres, será castigado con prisión de dos a tres meses y con multa de 500 a 30.000 francos”.

En cuanto a la libertad de contratar, es un principio básico que respeto; pero ¿están seguros los que con ella argumentan que el proyecto ataca en realidad la libertad de contratar?

Tratándose de los alquileres y de sus aumentos en nuestro país ¿existe acaso en el hecho la tan decantada libertad de contratar? ¿No es esta una mentira convencional? ¿Para quién existe esa libertad? Es por ventura para el inquilino que lleva el dogal y que vuelve los ojos a todas partes y no encuentra sino esta disyuntiva: o someterse a la explotación o habitar a "l'aria aperta"? Y como la autoridad no permite ubicar su hogar en las plazas o en carpas como los gitanos, la única libertad que tiene el inquilino es la de pagar lo que le pidan, o costa tal vez de disminuir el pan o la leche para sus pequeños hijos.

Las medidas que propongo para la tasación de alquileres son transitorias; apenas si durarán el tiempo indispensable para que esta aguda crisis tienda a normalizarse. Cuando la nueva edificación se haya operado, esta ley de circunstancia habrá pasado. Quiere esto decir que no puede paralizar la edificación que, por otra parte, se encontrará estimulada por la ley de contribución territorial que habéis sancionado ya, a propuesta de la comisión de presupuesto, la cual exonera de impuesto a las mejoras.

Los gastos que origine este proyecto, si llega a convertirse en ley, se encontrarán ampliamente cubiertos con los recursos que ella misma establece y que, además de ser muy justos, van encaminados a estimular las nuevas construcciones, gravando el baldío dentro de una zona en que la propiedad edificada produce rentas cuantiosas y seguras. Equiparo el baldío a toda esa propiedad parasitaria (el vocablo es perfectamente aplicable) ubicado en el centro mismo de nuestra capital y que ostenta vistosos edificios de un solo piso. Esos casuchos no sólo afean la ciudad, sino que obligan a la diseminación de la población y hacen más costosos los servicios edilicios, substrayendo al erario municipal cuantiosas rentas que deberían producirle esas céntricas propiedades. Entretanto, esa propiedad vive a expensas del crecimiento de la ciudad, sus dueños no hacen nada y capitalizan ingentes fortunas con el simple aumento del valor de la tierra. En realidad son utilidades no ganadas por el trabajo acumulado; y nada más justo que gravarlas con una sobretasa del 4 o'oo. De sus dueños dependerá desgravarlas; para ello les bastará concordar con el interés general, es decir, que levantando nuevos edificios tendrán mayor renta y estarán exentos de todo impuesto por esas mejoras. Las medidas que propongo, honorable cámara, son de una urgencia que no admite discusión; la crisis es terrible y el mal-

estar, originado por el alza inconsiderada de los alquileres, es un problema cuya solución es reclamada por todos.

No podemos abandonar a los ciudadanos, ni a los comerciantes que explotados se tienen que convertir en explotadores a su vez, pues para muchos de éstos el capítulo más pesado de sus gastos generales es el alquiler.

En la sesión del 27 de enero de este año de la cámara de diputados de Francia, el diputado Lauche decía:

"Los propietarios, por falta de competencia, son dueños de la situación y abusan de ello.

"Es necesario que la ley intervenga para reducir los excesos de los propietarios sin escrúpulos y, también, para impedir que el mal continúe causando sus efectos.

"Hospedarse y encontrar locales para su industria o su comercio es una obligación para todos.

"¿Se puede permitir que se explote sin piedad dicha obligación?

"Los inquilinos no deben ser abandonados y se impone la intervención del legislador".

Si el orden social actual ha de mantenerse es a condición de evolucionar de acuerdo con las exigencias de una mayor justicia, despojándose de todo odioso privilegio que explote las necesidades de una parte de la sociedad en beneficio exclusivo de la otra parte. La democracia necesita probar que es eficaz para resolver los problemas que agitan al mundo en esta hora difícil como lo son todas las de transición; ella debe probar que es apta, que tiene dentro de sí misma los resortes indispensables para resolver por una evolución progresiva la convivencia de los hombres dentro de normas justas, y si descuida emplear esos resortes, no hará sino desacreditarse y dará pábulo a la revolución en pro del gobierno de clase, nuevo Jordán en que ha purificarse el mundo, según unos, o piélago, según otros, en que se ahogará el estado o surgirán nuevas formas de injusticia colectiva.

Es pues, urgente reaccionar contra estos abusos del capitalismo ciego que, a medida que el riesgo de no alquilar ha disminuído, a medida que la seguridad del cobro de los alquileres ha aumentado, aumenta también esos alquileres. ¿Y qué aumentos, honorable cámara! Hay alquileres aumentados dos y tres veces en el año y no son aumentos de 10 o 15 por ciento, pues algunos van hasta doblar los alquileres de 1918!

¡He ahí una moral bastante rara! Una moral que echa leña a la hoguera, y exaspera a las clases trabajadoras.

Esos señores propietarios contribuyen a la revolución y al desorden en una proporción que ni siquiera sospechan. No todo el malestar social proviene de la propaganda maximalista disolvente; nadie conspira tanto contra la sociedad como ese capitalismo delirante que tiende a hacer odiosa la vida y que es responsable del descrédito institucional de la sociedad actual. En vez de robustecer el orden individualista, lo desacredita y obliga cada vez más a la intervención colectiva. Los que no somos exclusivamente doctrinarios, los que pensamos que es insensato romper los moldes en los que se ha formado la vida colectiva al través de las edades, los que no concebimos el aniquilamiento de la libertad individual, pero creemos que la intervención colectiva tiende a ser cada vez mayor por las exigencias del progreso y las modalidades de la vida moderna, en una palabra los que no somos individualistas tendenciosamente ni socialistas, pensamos en la evolución hacia una economía política de mayor justicia social, dándole el elemento ético, sin el cual la ciencia nombrada acusará hechos más o menos exactos, dará las reglas que rigen la riqueza, pero carecerá de las virtudes necesarias para mejorar el mundo.

Antes de terminar esta exposición de motivos, séame permitido hacer notar a vuestra honorabilidad que el proyecto no lleva un ataque a los propietarios, impidiendo una justa remuneración de los capitales por ellos invertidos. Por ello es que acuerda una remuneración que no podrá ser inferior al 8 por 100 de la tasación para el pago de la contribución directa o territorial. Establecer una tasación del valor de la finca en cada caso hubiera sido un procedimiento largo y engorroso y por eso me atengo a la avaluación general.

Podrá, sin embargo, objetarse que la valuación fiscal es casi siempre inferior al valor real del inmueble. Esa es un corruptela que debe desaparecer de nuestro sistema fiscal. La avaluación debe ser más o menos real y lo que debe hacerse si el impuesto resultara muy oneroso es rebajar la tasa, pero no la valuación. Y bien, disponiendo la nueva ley de contribución territorial sancionada ya por vuestra honorabilidad para este año una nueva avaluación general, está en manos de los propietarios pedir una tasación que responda al valor real. Se ganará con ello: primero, porque el fisco percibirá mayor renta, y segundo, porque los alquileres se tasarán al 8 o/o del valor real, con lo cual los capitalistas no tendrán de que quejarse y los inquilinos se librarán de lo arbitrario. Tendremos todá la estabilidad tan necesaria a cada ciudadano para

arreglar su vida de acuerdo con su presupuesto.

Es posible, señores diputados, que la fórmula que propongo para resolver el problema del alza de los alquileres, pueda ser sustituida por otra más perfecta o más inteligente; pero lo que no hay que dudar es que hay que hacer algo y que hay que hacerlo pronto; lo reclaman millares de hogares y lo exige el interés general que está por encima del interés individual por importante que éste sea.

La cámara emanada del pueblo no puede volverle las espaldas y menos abandonarlo en estos momentos de angustia: son los trabajadores, son los pobres, son la mayoría, los que reclaman vuestra acción; ella es, lo repito, tan urgente que toda dilación sería imperdonable.

—Destínase el proyecto a la comisión de legislación.

5

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º — Los títulos de escribano expedidos antes de la vigencia de la presente ley por las cámaras y tribunales superiores de justicia nacionales o provinciales e institutos universitarios o poderes ejecutivos provinciales, tendrán la misma validez que los que conceden las universidades de la nación.

Art. 2.º—Comuníquese al poder ejecutivo.

Jacinto Fernández. — Juan Luis Ferrarotti.

Sr. Fernández (J.). — Señor presidente:

Antes de que la ley que ha dispuesto que la carrera del notariado debe cursarse en las facultades de derecho de la nación y que ellas son las únicas habilitadas para conceder los títulos de escribano, estos profesionales hicieron sus estudios, rindieron sus exámenes y obtuvieron su título de acuerdo con las leyes anteriores.

Por lo que respecta a los escribanos de la capital de la república, equiparar sus títulos con los que ahora expiden las universidades es una consecuencia lógica del carácter ya nacional que tienen, obtenidos conforme a la legislación vigente en la época en que fueron expedidos, de la misma manera que en cuanto a su validez y prerrogativas se consideraron en otro tiempo los títulos de abogado expedidos por los tribunales superiores de justicia de la nación, respecto de los cuales no se hizo